

EL MAYOR GASTO EN PENSIONES Y PARO DIFICULTA CUADRAR LOS PRESUPUESTOS

La escalada de la inflación supondrá 2.000 millones extra a la Seguridad Social en un proyecto que afronta la actualización del desempleo sin cumplir ningún año las propias previsiones del Ejecutivo

José María Camarero
Madrid



Aunque la decisión de presentar los primeros Presupuestos de la legislatura será meramente política, los ministerios económicos no consiguen cuadrar unas cuentas públicas zarandeadas por una inflación mucho más disparada de lo que preveía el Ejecutivo. Y más IPC implica una revalorización de las pensiones, con un gasto extra que mueve el resto de partidas presupuestarias. Esa es la gran dificultad a la que se enfrentan los técnicos ministeriales en este tramo final del verano junto a otra menos conocida: las prestaciones por desempleo, que no han parado de subir, y no tienen visos de disminuir en 2027, a pesar de la bajada del paro.

Estos dos grandes capítulos del gasto –pensiones, fundamentalmente, pero también el desempleo– son los que están obligando al Ejecutivo a ajustar el proyecto definitivo de Presupuestos en una recta final más compleja de lo que inicialmente podrían prever desde Hacienda, Economía, Trabajo o Seguridad Social, los departamentos más implicados en estos cálculos, según apuntan varias fuentes gubernamentales consultadas por ABC. En un mes vence el plazo constitucional para que el Consejo de Ministros apruebe el proyecto. Y antes de fin de año debería estar validado por el Congreso. Es la intención que el Gobierno muestra por tercer ejercicio consecutivo, sin que finalmente haya cumplido sus propias promesas.

El gran cajón presupuestario que se lleva cuatro de cada diez euros de dinero público anualmente son las prestaciones gestionadas por la Seguridad Social, fundamentalmente las de jubilación, aunque también otras como la incapacidad temporal, una partida disparada por el auge de las bajas laborales. El último dato de inflación adelantada, conocido ayer mismo, no deja bue-

nas sensaciones: una subida de los precios interanual del 4,3% en agosto apunta a que el coste de la vida estará a finales de año más cerca del 4% que del 2%. Y eso implica que las pensiones subirán más que este año –un 2,8%– y en la línea de lo que lo hicieron en 2024, un 3,8%. Ya entonces, la inyección extra presupuestaria fue considerable.

Si el IPC de diciembre, con el que se calcula por ley la revalorización de las pensiones, se acerca al 4%, el gasto adicional en pensiones superará los 2.000 millones de euros por este motivo, a razón de hasta 180 millones por cada décima por encima del 2%. A esa cuantía hay que sumar la incorporación de nuevos jubilados al sistema, con prestaciones cada vez mayores por sus extensas vidas laborales: la nueva pensión de jubilación supera ya los 1.800 euros al mes. En 2025, el gasto en pensiones ya fue de 189.599 millones, un récord que ya se iba a superar este año, pero que se verá aún más condicionado por la potencialmente mayor revalorización de esta partida en dos años.

PENSIONES Y DESEMPLEO

40%

La partida destinada a prestaciones por desempleo ha aumentado un 40% en la era Sánchez, hasta rozar los 25.000 millones de euros al año.

40.000 MILLONES

Cada año, el Gobierno tiene que autorizar inyecciones extra de más de 40.000 millones a la Seguridad Social para hacer frente al pago de pensiones.

El gasto en pensiones es el que sigue complicando todos los cálculos para cuadrar las cuentas. La deuda pública es la herramienta que ha usado la Administración en los últimos ejercicios para tapar el agujero entre las prestaciones y los ingresos del sistema. Estas inyecciones han superando los 40.000 millones en los últimos años, una práctica que permitirá de nuevo soportar el gasto de 2027, al menos para poder sufragar las pagas extra, que es cuando más tensiones vive la Tesorería.

El otro gasto que también está condicionando los cálculos presupuestarios es el de las prestaciones por desempleo. A pesar de un contexto de bajada de paro como el actual. La discrepancia entre la mejora del empleo y el mayor gasto en prestaciones ha agrandado la brecha en las dos últimas legislaturas: mientras que el número de desempleados se ha reducido un 23%, el gasto destinado a prestaciones y sub-

sidios ha aumentado casi un 40%, hasta los 24.400 millones en 2025, el último ejercicio con las cuentas liquidadas.

Desde el Ministerio de Trabajo han insistido durante los últimos años en que este aumento responde al crecimiento nominal de los salarios, sobre los que se calcula la prestación como a cambios normativos que han elevado su importe, así como la reducción del recorte aplicado tras los seis primeros meses de percepción.

Sin embargo, hay otra razón de peso: el Gobierno no ha cumplido nunca el objetivo de reducción de la tasa de desempleo planteado en sus planes estructurales. La realidad siempre ha ido por detrás de las estimaciones, a pesar del contexto de caída del paro desde el covid. Por ejemplo, en 2022 planteaban que la tasa de paro bajase al 9,6% en 2025. Este año, 2026, aún se encuentra cercana al 10%. Incluso los diferentes programas actualizados de



